



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

CAUSA N°4689/2021

Sentencia Definitiva

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los _____, reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA, se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR JUAN A.FANTINI ALBARENQUE DIJO

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, apela la resolución 2019-514 E AFIP-DICRSS#SDGTLSS. que rechaza el recurso de revisión interpuesto contra la Disposición de la OSUPUCN n° 15/18 que desestima la impugnación formulada, en cuanto a la deuda que se determina en concepto de pago de alícuota del 0,5%correspondiente al periodo mayo 2016 a septiembre 2017.

El recurrente no efectúa el depósito previo de la suma cuestionada (conf. art.15 de la ley 18820) alega imposibilidad de oblarlo alude a la situación de emergencia sanitaria y que el monto cuestionado es objetivamente significativo, cuyo pago implica un desapoderamiento al ser desproporcionado respecto a su capacidad económica y financiera.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Microómnibus Barrancas de Belgrano s/Impugnación” (sent. del 21/12/89, Fallos 312:2490) ratificó que las leyes 18.820 y 21.864 no resultan violatorias del art. 8° inc. 1°, de la Convención Americana de Derechos Humanos,Admitió en reiteradas oportunidades la validez constitucional de la exigencia del pago previo de la deuda determinada por la autoridad administrativa como requisito previo a la intervención judicial (cf. doctrina de Fallos 155:96; 162:263; 235:479; 238:418; 296:57; etc.). Sólo justificó apartarse de la imposición legal, en casos de monto excepcional ,en que el requisito en cuestión pudiera constituir un obstáculo insalvable para la revisión de la pena por los tribunales de justicia, fundándose en el derecho de defensa del art. 18 de la Constitución Nacional (sea porque ese pago generaría un importante desapoderamiento - Fallos, 247:181 ; 205:208 y su cita-, sea por la falta comprobada e inculpable de los medios para afrontarlo -Fallos, 256:38; 261:101-, sea porque se revele un inmediato e inequívoco propósito persecutorio o desviación de poder -Fallos 288:287; 308:381-). Sin embargo, esta excepción sólo es aplicable cuando “las constancias de autos no permitan descartar, por caprichosa, la dificultad alegada para la satisfacción inmediata de la multa impuesta”, exigiendo que tal imposibilidad encuentre sustento en elementos objetivos de criterio agregados a los autos, estimando insuficientes a estos efectos las manifestaciones en abstracto del interesado (cf. C.S.J.N., Fallos, 225:201; 249:221; etc.).

Fecha de firma: 09/09/2022

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE



#35422247#303955838#20220907091609061

El recurrente no acredita una situación económico financiera que le impida afrontar el depósito previo del importe debatido en autos, mas allá de la referencia general a la misma

Existe una disposición legal cuya rigurosidad se ha atemperado por una saludable jurisprudencia en torno a situaciones concretas y de excepción que tienen en mira la calidad del recurrente y específicamente a su capacidad económica para cumplirla.

No cabe sino exigir en el recurrente, por lo menos, la demostración de los extremos que le impidan acatar tal obligación. Extremos que no puede, ni debe, presumir el Juez, cuya función es aplicar el derecho al caso concreto que se lleva a su conocimiento, en sus diversas facetas y posibilidades con imparcial objetividad, y no suplir la inactividad de las partes en defensa de ese derecho

“El requisito de depósito previo (art. 15 de la ley 18.820), que habilita la instancia recursiva, tiene supeditada su procedencia en aquellos casos en que se demuestre un detrimento o pérdida de derechos reconocidos por la CN o cuando el monto del depósito reviste desproporcionada magnitud en relación con la concreta capacidad económica del recurrente, pues si no se acompaña elemento alguno tendiente a comprobar tales presupuestos, corresponde desestimar el recurso interpuesto.(Expte. 37197/2016. "GUACARS S.A. c/ Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social s/ Impugnación de deuda".5/03/18 Sentencia interlocutoria. Cámara Federal de la Seguridad Social. Sala III.)

Por consiguiente no cabe sino declarar formalmente inadmisibile el recurso de apelación interpuesto.

En atención al modo como se resuelve, las costas se imponen al recurrente vencido, conforme art. 68CPCCN y criterio del Alto Tribunal en los autos "Cooperativa Eléctrica Azul Ltda. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos CD.G.I.C" con fecha 5 de octubre de 2004, oportunidad en que el Tribunal modificó la doctrina de Fallos: 323:1557.

En cuanto a la regulación de los honorarios, corresponde al juzgador analizar la labor desarrollada por el profesional, tomando para ello en cuenta no sólo los montos cuestionados, sino también la complejidad de la materia debatida, la eficacia de las tareas y la extensión de los trabajos llevados a cabo por los letrados. Cabe tener presente, asimismo, que la Ley 27.423 no puede ser aplicada en autos en forma mecánica dado que dicho texto legal no contempla expresamente el proceso de impugnación de deuda.

“La regulación no depende exclusivamente del monto del juicio o de las escalas pertinentes, sino de todo un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos, que pueden ser evaluadas por los jueces con un amplio margen de discrecionalidad, entre las que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, el mérito de la causa, la calidad, eficacia y la extensión del trabajo (voto del Dr. Carlos S. Fayt).(CSJN T. 315 , P. 1620)

En consecuencia, se tomara en cuenta la labor desarrollada por el letrado, la calidad, eficacia e importancia económica del proceso (Conf. Doctrina art. 1255CCyCN y lo





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

establecido por el Alto Tribunal en Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/ acción, declarativa. Sent. Del 4 de septiembre de 2018)

En razón de ello se regulan los honorarios de la dirección letrada de la parte actora en 15 UMA equivalente a \$ 135.015, ciento treinta y cinco mil quince pesos y los de la demandada en 22 UMA equivalente a \$ 198.022, ciento noventa y ocho mil veintidós pesos (Conf. Acordada N° 12/2022, valor UMA 9001) importes a los que de adicionara el IVA en caso de corresponder (cfr. Excma. C.S.J.N. “Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación”, sent. Del 16/06/93,Fallos 316:1523).

Por lo expuesto, no cabe sino propiciar declarar formalmente inadmisibile el recurso de apelación deducido, en virtud de no haberse dado cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 15 de la ley 18.820, con costas a cargo del recurrente vencido. Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en 15 UMA equivalente a \$ 135.015, ciento treinta y cinco mil quince pesos y los de la demandada en 22 UMA equivalente a \$ 198.022, ciento noventa y ocho mil veintidós pesos (Conf. Acordada N° 12/2022), importes a los que se adicionara el IVA en caso de corresponder

EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO

Adhiero al voto del Dr. Fantini Albarenque

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO

Disiento con el voto de mi colega preopinante.

En autos el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados cuestiona la Resolución de AFIP 514-E-2019 en cuanto determinó la existencia de una deuda de \$ 14.054.872,31 en concepto de diferencias en el pago de contribuciones patronales con base en la aplicación del 0,5% sobre la alícuota del 6% que establece el artículo 16 de la ley 23660, correspondiente al periodo comprendido entre mayo 2016 a septiembre 2017.

Previo a introducirme en el estudio de la causa considero pertinente recordar que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados fue creado por ley 19.032. Dicho cuerpo normativo en su artículo 1º, modificado por la ley 25.615, dispone la creación de ese Instituto, que funcionará como persona jurídica de derecho público no estatal, con individualidad financiera y administrativa, quedando su acción sometida a contralor de la sindicatura que se instituye en su seno, y una auditoría externa a cargo de la Auditoria General de la Nación.

La ley 19.983 excluyó de la competencia judicial la reclamación pecuniaria de cualquier naturaleza o causa entre organismos administrativos del Estado Nacional, centralizados o descentralizados, incluidas las entidades autárquicas, empresas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. La jurisprudencia ha establecido que la solución prevista en la ley 19.983 reconoce la imposibilidad de un pleito entre dos entes públicos nacionales, pues en definitiva equivale a que el Estado Nacional litigue contra si



mismo, ocasionando un dispendio jurisdiccional y la producción de gastos causídicos entre entidades cuyo patrimonio es en definitiva uno (CSJN “Universidad de Buenos Aires c/Nación Argentina-Poder Ejecutivo Nacional” sent. del 18/06/1991).

Ahora bien, a través del decreto 579/2002 se declaró inaplicable el régimen de la ley 19.983 al conflicto suscitado entre la Dirección General de Ingresos Públicos, dependiente de la AFIP, y el ex Instituto de Servicios Sociales para el Personal Ferroviario, por cobro de aportes y contribuciones previsionales, atento la transformación del ex instituto en una persona de derecho público no estatal. Tal decisión resulta de aplicación analógica al caso a estudio atento que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados reviste idéntico carácter.

Dilucidada la anterior cuestión, pasaré a analizar la cuestión relativa al cumplimiento del depósito previo exigido por el artículo 15 de la ley 18.820.

Desde el punto de vista procesal entiendo que corresponde la habilitación de la presente instancia por cuanto, si bien en nuestro derecho positivo la regla solve et repete ha sido considerada congruente con las garantías procesales que emanan del art. 18 de la CN y 8° del Pacto de San José de Costa Rica, tal imperativo legal puede ser atenuado en aquellos casos en que existe una desproporcionada magnitud entre la suma que el contribuyente debe ingresar (en el caso \$ 14.054.872,31) y su concreta capacidad económica (CSJN 21/12/89 “Micrómnibus Barrancas de Belgrano” Fallo 312:2490, 11/06/98 “Cadesu Cooperativa de Trabajo Ltda. c/DGI” Fallo 312:1741, 02/08/05 “Centro Diagnóstico de Virus SRL c/AFIP” Fallo 328:2938 entre otros). Además, si bien es cierto que el impugnante no acompañó elementos de prueba a fin de conocer su real situación patrimonial lo cierto es que el Poder Ejecutivo, a través de distintas normas, ha declarado la emergencia sanitaria del sector salud situación que ha venido prorrogándose en el tiempo (ley 25.590, 25.972, 26.077, 26.204, 26.283, 26.339, 26.456, 26.563, 26.729, 26.896), por lo que a mi juicio debe prevalecer el debido derecho de defensa que en nuestro medio goza de tutela constitucional (art. 18 CN).

Con respecto al fondo de la cuestión sometida a juzgamiento la impugnante rechaza la pretensión fiscal pues entiende que arbitrariamente se le reclama el pago de una alícuota del 0.5% a aplicar sobre el 6% que exige la norma en su condición de empleador. Si bien reconoce que el reclamo encontraría su fundamento normativo en el decreto 1.684/74 expresa que el mismo fue dictado hace más de cuarenta años en el marco de una ley de emergencia nacional no resultando aplicable a las obras sociales creadas a través de regímenes particulares como lo es el decreto ley 19.330/71, entidad de la que es sucesora la Obra Social reclamante. Sostiene que el decreto 1.684/74 habría sido derogado por las leyes 20.004, 24.967 y 26.939.

Entiendo que no asiste razón al apelante.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Tal como ha expresado la jurisprudencia de esta Cámara la modificación introducida por el artículo 23 de la ley 25.239 a la ley de Obras Sociales 23.660 se limitó a sustituir el inciso a) del artículo 16 reduciendo el porcentaje de las contribuciones patronales allí previsto. Dejó subsistentes los restantes incisos y, en especial, el último párrafo de dicho artículo que establece expresamente el mantenimiento de los mayores montos que perciban las obras sociales, emergentes de otras fuentes diferenciadas. Ninguna mención formuló el legislador en ese sentido, ni sobre la ley 19.330 que regula la obra social reclamante, ni menos aun sobre sus decretos reglamentarios que habían fijado la contribución patronal distinta al régimen general -decretos 259/74 y 1.684/74- (conf. CSJN “Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación c/Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/Acción de amparo”), por lo que surge claramente que se consideró aplicable el decreto 259/74 que elevó al 6% dicha contribución y el decreto 1.684/74 que luego incrementó en un medio por ciento (0,50%) para todas aquellas que formaban parte del régimen de la ley 18.610 (conf. CFSS Sala III “Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados c/Administración Federal de Ingresos Públicos s/Impugnación de deuda” del dictamen fiscal al que adhiere la Sala, sent. del 05/03/2018; ídem Sala I “Instituto Nacional de Servicios Sociales. para Jubilados y Pensionados c/AFIP s/Impugnación de deuda” sent. del 18/10/2018).

En virtud de lo transcripto y compartiendo sus términos entiendo corresponde confirmar la resolución recurrida.

Con respecto a los honorarios, teniendo en cuenta la calidad de la labor realizada, los términos de la ley 27.423 y la facultad que otorga al magistrado el artículo 1255 del C.C. y Ccial de la Nación se regulan los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte demandada y de la parte actora en 10 UMA (\$ 90.010) y 6 UMA (\$54.006) CSJN. Ac.12/2022, ley 27.423.

Por lo expuesto propongo: declarar habilitada la presente instancia judicial, confirmarla resolución recurrida. Las costas se impondrán al impugnante (art. 68 CPCCN). Regular los honorarios de representación letrada de la parte demandada en 10 UMA (\$ 90.010) y los correspondientes a la parte actora en 6 UMA (\$ 54.006), conf. CSJN. Ac. 12/2022. Así lo voto.

A mérito de lo que resulta del voto de la mayoría, el Tribunal **RESUELVE:** Declarar formalmente inadmisibile el recurso de apelación deducido, en virtud de no haberse dado cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 15 de la ley 18.820, con costas a cargo del recurrente vencido. Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en 15 UMA equivalente a \$ 135.015, ciento treinta y cinco mil quince pesos y los de la demandada en 22



UMA equivalente a \$ 198.022, ciento noventa y ocho mil veintidós pesos (Conf. Acordada N° 12/2022), importes a los que se adicionara el IVA en caso de corresponder.
Regístrese. Protocolícese. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

WALTER F. CARNOTA
Juez de Cámara Subrogante

JUAN A FANTINI ALBARENQUE
Juez de Cámara

NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara

Ante mí: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI
Secretaria de Cámara

.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

WALTER F. CARNOTA
Juez de Cámara
(Subrogante)

JUAN A. FANTINI ALBARENQUE
Juez de Cámara

NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara

ANTE MÍ:
AMANDA LUCÍA PAWLOWSKI
Secretaria de Cámara

MPV

